



DECLARACIÓN PÚBLICA

AFUDEP ante el acuerdo de reajuste del sector público

La **Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Defensoría Penal Pública (AFUDEP)** ha tomado conocimiento del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público en materia de reajuste de remuneraciones para el año 2026.

Si bien comprendemos el escenario económico general que enfrenta el país, como organización sindical **no podemos estar de acuerdo con el porcentaje alcanzado**, ya que este no solo es insuficiente, sino que consolida un retroceso en el poder adquisitivo real de las y los trabajadores del sector público.

El reajuste acordado, de carácter gradual y que totaliza un **3,4%**, se encuentra por debajo de las proyecciones de inflación estimadas por el propio Ministerio de Hacienda —en torno al **4,4%**— y por el Banco Central, que proyecta una inflación cercana al **4%**. En los hechos, esto implica que las remuneraciones del sector público no crecen, sino que decrecen en términos reales, profundizando una pérdida sostenida del valor del trabajo en el Estado.

Este escenario es particularmente grave si se considera el contexto de alta exigencia laboral, sobrecarga de funciones, déficit estructural de personal y deterioro progresivo de las condiciones de trabajo que enfrentan miles de funcionarias y funcionarios públicos, entre ellos quienes sostienen día a día el sistema de justicia y la defensa penal pública.

A lo anterior se suma un antecedente políticamente alarmante, conocido en la Asamblea de ANEF realizada el **miércoles 17**, donde, ante la consulta de las y los asistentes sobre el avance del proyecto de **40 horas** para el sector público, dirigentes nacionales informaron que, según lo señalado por el propio Ministro de Economía, no existiría ni presupuesto ni apoyo político para avanzar en dicha materia.

Esta señal resulta inaceptable. La reducción de la jornada laboral no es un privilegio: es una política de bienestar, salud y dignidad laboral. Más aún cuando quienes hoy trabajan en el sector público quedaron excluidos de un derecho que sí fue reconocido para quienes se rigen por el Código del Trabajo.

Al respecto, Ignacio **Ramírez** Villegas, integrante de AFUDEP, señala: **“Fui integrante de la Coordinadora por las 40 Horas, que logró impulsar y conquistar la ley de reducción de jornada para el sector privado”**. Por ello, afirmamos con claridad que esta exclusión del sector público no es técnica ni inevitable, sino una decisión política que vuelve a relegar a las y los trabajadores del Estado —a sus familias y a sus condiciones de vida— a un segundo o tercer plano.

Como AFUDEP, creemos que el Estado, en su rol de empleador, debe predicar con el ejemplo. No es posible fortalecer los servicios públicos ni la confianza ciudadana si se continúa precarizando el trabajo de quienes los sostienen.

Esperamos que, en el marco de la discusión legislativa del proyecto de reajuste, se reabra el debate sobre el valor real del trabajo público, la recuperación del poder adquisitivo, la reducción de jornada y el respeto efectivo a la dignidad laboral.

AFUDEP

Asociación de Funcionarias y Funcionarios de la Defensoría Penal Pública

Diciembre 2025